

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	Ney Enrique Arrieta Jiménez
DEMANDADAS	Empresa Antioqueña de Energía S.A.E.S.P. “EADE” hoy liquidada y sucedida procesalmente por BBVA FIDUCIARIA S.A.
RADICADO UNICO NACIONAL	05001 31 05 014 2015 01523 02
TIPO DE PROCESO	Ejecutivo conexo
DECISIÓN	Confirma
ACTA DE DECISIÓN	072 de 2021

Medellín, veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por ambas partes, contra la decisión del 22 de octubre de 2020, que resuelve excepciones dentro del presente proceso ejecutivo.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

En audiencia del 22 de octubre de 2020 se declaró probada parcialmente la excepción de pago por la suma de \$89.182.780. Se ordenó continuar con la ejecución por el saldo insoluto resultante de la liquidación de los salarios y prestaciones legales y extralegales, partiendo de un salario de \$2.333.928 desde el 3 de abril de 2005 al 25 de junio de 2007, (fecha de liquidación final), en los términos de la providencia proferida por la Sala Sexta de Decisión Laboral de este tribunal. Se indicó que la liquidación se discriminará en el término procesal respectivo conforme al artículo 446 del Código General del Proceso, disponiéndose deducir de la liquidación, el valor de \$89.182.780, pagado al demandante, y por el cual se declaró el pago parcial de la obligación.

Para ello aludió el A quo al folio 430 del proceso ordinario, donde la apoderada judicial de la demandada, en virtud a la objeción de costas, presentó la forma como fue liquidada la sentencia, infiriendo que si bien la accionada canceló por salarios y prestaciones \$89.182.780 dicho pago se hizo con base en un salario de \$758.364, perdiendo de vista lo ordenado por la CSJ frente al salario acreditado que era de \$2.333.928, y que en dicha liquidación se omitió que las prestaciones objeto de condena fueron las legales y extralegales de la convención colectiva.

Respecto a los aportes a seguridad social en pensiones del 3 de abril de 2005 al 25 de junio de 2007, se declaró probada la excepción de pago total de la obligación, en tanto al demandante se le consignó con IBL de \$2.334.000.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte ejecutante presentó recurso de apelación indicando:

“Además de lo expuesto en el escrito en el que se describió el traslado de las excepciones, debe tenerse en cuenta que en la demanda ejecutiva, se cita la sentencia de la CSJ, que en sede de instancia, después de casar la sentencia del TSM, ordenó el reintegro del ejecutante.

De unas pretensiones subsidiarias a título de compensación, el comportamiento de la justicia y de las partes condujo finalmente a la situación en la que nos encontramos, discutiendo el pago de una simple indemnización por despido para saber si es total o parcial, no, no señor juez, aquí no se puede seguir cerrando los ojos, aquí hay una sentencia de reintegro que no se ha cumplido porque no se ha querido observar la perentoria disposición del artículo 71 de la convención de la que se beneficiaba el ejecutante fl. 112 ordinario, según la cual, en caso de liquidación de EADE, se da el fenómeno de la sustitución patronal que operó de manera automática, lo que significa que desde el momento mismo de la desaparición de EADE el patrono que debe responder es EPM, lo anterior significa que no era necesario demandar a EPM porque ella tenía pleno conocimiento como empresa matriz y dominante de la demanda que cursaba contra su controlada EADE, y lo sabía porque desde el 2000 aparecía como accionista mayoritaria de EADE, en tanto que para el 25 de **junio** de 2006, cuando se produjo la reunión para disolver a EADE, EPM tenía el 64.03% de las acciones en aquella y para el 25 de junio de 2007, fecha de liquidación definitiva de la entidad ya EPM contaba con el 99.999999,96 de las acciones de EADE, entonces, en providencia del TSM **del 12 de agosto de 2019**, desconociendo el art 71 de la convención colectiva pactada entre SINTRAELECOL y EADE, que como se ve de lo dicho anteriormente, no tenía poder decisorio, ni voluntad porque todo el proceso de su liquidación fue dirigido por EPM, dueña absoluta de EADE al momento de su liquidación, al resolver la petición de nulidad dijo textualmente:

“Corolario de lo anterior, no es factible en el trámite de esta ejecución, integrar como ejecutada a una persona jurídica que no fue vinculada en el proceso ordinario y, mucho menos, obligada en la sentencia que presta mérito ejecutivo, pues contra de Empresas Públicas de Medellín, no existe una obligación expresa, clara y exigible, ni se observa comprometida su responsabilidad en este caso de manera alguna.”

La suerte de los trabajadores de EADE ya fue definida de manera tardía pero inequívoca por la CSJ, a partir de la sentencia de José María Nanclares rad 20195 del 2017 y otras como las de Lía Patricia Marín Orozco y Víctor Hernán Vergara Henao y otros, y muy particularmente la sentencia que dio la orden como juez constitucional a la Sala Laboral de Descongestión número dos de la CSJ para que fallara conforme a lo indicado en la sentencia de la Sala Civil de la CSJ, la STC 4459 de 2020 de Luis Darío Torres Vera, en la que mencionando la sustitución patronal indico:

“Los trabajadores nunca fueron separados de su cargo y en tal medida las consecuencias sociales y prestacionales propias del contrato de trabajo se mantienen vigentes”

Ya para finalizar, después de interponer y sustentar el recurso pido al tribunal que enderece esta situación, ejerciendo un verdadero control de legalidad al desatar este recurso en harás de proteger los derechos fundamentales del ejecutante conforme lo ordenan los art 48 del CPT y 132 del CGP, pues existe una sentencia ejecutoriada de reintegro que se debe cumplir en los términos del artículo 71 de la Convención colectiva de la que se beneficiaba el ejecutante por la sustitución patronal”

Así mismo, la apoderada de la parte ejecutada presentó recurso de apelación indicando que en el proceso ordinario a fl. 53 obra una constancia de la liquidación realizada a favor del ejecutante, donde se tenía como constancia de liquidación un salario base \$2.333.928, adicionalmente que las liquidaciones realizadas o presentadas por la entidad en su momento EADE en liquidación, fueron expuestas o se le dieron el correspondiente traslado a la parte demandante y nunca las objetó, inclusive al momento de presentar actualmente su recurso de apelación no hizo ni siquiera mención cuál era el salario base que considera debe ser tenido en cuenta para hacer la liquidación del crédito de este proceso ejecutivo, lo que quiere decir que se encuentra conforme a la liquidación realizada en el proceso ejecutivo y en el proceso ordinario que es la base para la presente ejecución.

Dice que hay pago total de la obligación y no un pago parcial, y que si consideraba que había pago parcial por lo menos hubiera hecho debate sobre la liquidación realizada o en el momento de las excepciones, en el traslado de las excepciones, pero la apoderada no hizo mención alguna sobre la liquidación realizada sobre las prestaciones sociales legales y extralegales, que fueron realizadas de la manera ordenada por la sentencia de la CSJ y de acuerdo al contrato de trabajo que regía para ese momento con el demandante.

Agrega que no hay lugar a los argumentos del demandante en su recurso, porque ya se encuentra suficientemente decantado la imposibilidad de realizar un reintegro por parte de la entidad ejecutada porque carece de fundamento fáctico y jurídico cumplir con un reintegro por quien no tiene facultades para ello, esto cabría ser declarado en otro proceso frente a EPM

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de la parte ejecutante presenté alegatos de conclusión insistiendo en que la sentencia que ordenó el reintegro del actor está vigente, y el juez de conocimiento del ejecutivo no la puede derogar ni anular, porque tal decisión sería causal de nulidad en los términos del art 133 No 2 del CGP. Agrega que por orden expresa del art. 48

del CPL, el juez está en la obligación oficiosa de salir en defensa de los derechos fundamentales del actor y no puede cambiar un derecho fundamental por el pago de una suma de dinero arbitrariamente calculada. Dice que la sentencia de reintegro que necesariamente se tiene que cumplir, no puede desconocerse porque se dictó contra la filial o subsidiaria de una matriz que ostentaba al momento del fallo más del 50% de las acciones en la subordinada (EADE). Solicita acoger los argumentos del recurso de apelación y de esta alegación, ordenando el reintegro del ejecutante a las Empresas Públicas de Medellín, dando protección a sus derechos fundamentales.

La apoderada de la ejecutada presentó alegatos de conclusión reiterando lo argumentado en su recurso de alzada. Adujo estar establecido que al demandante se le realizó el pago por concepto de la condena ordenada por la Corte Suprema de Justicia, correspondiente a las prestaciones sociales legales y extralegales desde la fecha de despido el 3 de abril de 2005 hasta el 25 de junio de 2007, que arrojó un total de \$113.849.162, a la cual se le realizó la reducción en los términos ordenados por la H. CSJ.

Resalta que esa es la liquidación final ajustada conforme a esta orden y con las deducciones autorizadas. Y que el juzgado de primera instancia se limitó a una liquidación provisional presentada con anterioridad solo para verificar cómo se debían fijar las costas del proceso, que incluso no fue tomada en cuenta para este fin, y que de ser tomada en cuenta, el valor consignado a órdenes del juzgado hubiese sido menor, por lo que no debió ser considerada por el Señor Juez al momento de dictar sentencia.

Reitera que la liquidación definitiva presentada como cumplimiento de la sentencia, es la que se debe tener en consideración por el juzgador, en ella el salario base de liquidación es la suma de \$2.333.928 como se ordenó, ponderado al número de días trabajados cada año (2005, 2006 y 2007), la cual no fue objetada por el demandante. Incluso en la constancia de aportes a la seguridad social, aportada al proceso, en la planilla se encuentra como IBC la suma de \$2.334.000. Sostiene que no es posible que se pretenda por parte del juez de primera instancia decir que el pago realizado es

parcial, considerando una liquidación provisional que en ningún momento quedó en firme.

Frente a la solicitud de reintegro, señala que la parte ejecutante pretende con el recurso de apelación interpuesto, extralimitar los alcances de la sentencia presentada como título ejecutivo, incluso presentando hechos nuevos que no fueron objeto de debate, ni el proceso ordinario, ni en el proceso ejecutivo. Desconociendo la naturaleza jurídica del proceso ejecutivo y aún más desconociendo los diversos pronunciamientos que se han dado en el presente proceso, por parte del juez de conocimiento y de los magistrados del H. Tribunal Superior de Medellín. Concluye que no le asiste obligación de realizar pago alguno adicional, puesto que ya fue cancelado la totalidad de la obligación, ni es posible proceder con un acto de reintegro del demandante con fundamento en los argumentos expuestos por este H. Tribunal Superior de Medellín, en auto del 15 de mayo de 2019. Solicita revocar la sentencia y decretar el cumplimiento total de las obligaciones ordenadas por el H. Corte Supremo de Justicia.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico consiste en determinar, si la ejecutada dio cumplimiento a la sentencia judicial del 1 de agosto de 2012, proferida por la H. Corte Suprema de Justicia, o si por el contrario debe seguirse adelante la ejecución en los términos solicitados por la parte demandante en su recurso de alzada, o en la forma indicada por el a quo.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

Frente al reintegro del señor Ney Enrique Arrieta Jiménez a las Empresas Públicas de Medellín, en el que insiste su apoderada en el recurso de alzada, debe indicarse que

desde la providencia del 15 de mayo de 2019¹, la Sala Sexta de Decisión laboral de este tribunal resolvió frente a dicho tópico, indicando claramente que “no es viable ordenar el reintegro en contra de las Empresas Públicas de Medellín dado que no fue citada al proceso ordinario mencionado”.

Posteriormente, la parte ejecutante solicitó anular “todo lo actuado a partir del mandamiento ejecutivo, disponiendo en su lugar que el juez a quo disponga la ejecución de la sentencia, ordenando a EPM matriz de EADE y sustituta patronal y procedimental, que proceda al reintegro del acto a las Empresas Públicas de Medellín”. Y en providencia del 12 de agosto de 2019 emitida también por la Sala Sexta, se reiteró la improcedencia del reintegro deprecado frente a Empresas Públicas de Medellín, así:

“Para resolver, se advierte que el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en su artículo 100 indica:

“PROCEDENCIA DE LA EJECUCION. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso.”

Así mismo, el artículo 422 del C.G.P, aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral, establece:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”

Y el artículo 426 ibídem, consagra:

¹ Que resolvió recurso de apelación presentado por la parte ejecutante y realizó control de legalidad al auto que libró mandamiento de pago.

EJECUCIÓN POR OBLIGACIÓN DE DAR O HACER. Si la obligación es de dar una especie mueble o bienes de género distinto de dinero, el demandante podrá pedir, conjuntamente con la entrega, que la ejecución se extienda a los perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, para lo cual estimará bajo juramento su valor mensual, si no figura en el título ejecutivo.

De la misma manera se procederá si demanda una obligación de hacer y pide perjuicios por la demora en la ejecución del hecho.

Respecto al requisito de la claridad en el título para que éste tenga la connotación de ejecutivo, la doctrina ha señalado:

“La claridad de la obligación, está determinada por el entendimiento que acreedor y deudor tienen de las prestaciones que se deben, es decir, que exista una sola operación lógica y una sola consecuencia a la operación cognitiva, que permita establecer a las partes, sin racionamientos extensos para determinar el alcance de la obligación, la prestación (de hacer o dar), lo que se debe, desde cuándo se debe, el monto de lo que se debe, o que sea claramente deducible. O en otras palabras, como lo ha determinado el Dr. Nelson R. Mora: “...las características de la claridad son las siguientes, respecto de la obligación: la inteligibilidad, es decir, que la redacción esté estructurada en forma lógica y racional; la explicitación o sea que lo expresado por cada uno de los términos consignados en el documento indiquen en forma evidente el contenido y alcance de la obligación. La precisión o exactitud para significar que tanto el objeto de la obligación (en cuanto a su número, cantidad, calidad, etc.) Como las personas que intervienen, estén determinadas en forma clara y precisa”. En tal orden, el objeto de la obligación debe aparecer determinado en forma clara y precisa, lo mismo que las partes claramente indicadas e identificadas; así como certidumbre en cuanto al plazo y monto de la obligación o que pueda ser fácilmente deducible”. (Procesos de Ejecución. Tomo I, Editorial Temis.)

En el presente caso, del contenido y alcance de la sentencia que sirve como título ejecutivo², no se evidencia imposición de obligación alguna de cara a Empresas Públicas de Medellín, ni aparece el objeto de la obligación determinado en forma clara y precisa frente a dicha entidad, pues esta no fue indicada, ni identificada en la providencia que sirve como título ejecutivo.

Corolario de lo anterior, no es factible en el trámite de esta ejecución, integrar como ejecutada a una persona jurídica que no fue vinculada en el proceso ordinario y, mucho menos, obligada en la sentencia que presta mérito ejecutivo, pues contra de Empresas Públicas de Medellín, no existe una obligación expresa, clara y exigible, ni se observa comprometida su responsabilidad en este caso de manera alguna.

En consecuencia, no evidencia la Sala la configuración de ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 133 del CGP, ni mucho menos una nulidad constitucional; causales que por demás no fueron invocadas claramente por la memorialista, razón por la cual se negará su solicitud de nulidad.”

² FL303-331

Ahora, indica la recurrente que la suerte de los trabajadores de EADE ya fue definida inequívocamente por la H. CSJ:

“a partir de la sentencia de José María Nanclares rad 20195 del 2017 y otras como las de Lía Patricia Marín Orozco y Víctor Hernán Vergara Henao y otros, y muy particularmente la sentencia que dio la orden como juez constitucional a la Sala Laboral de Descongestión número dos de la CSJ para que fallara conforme a lo indicado en la sentencia de la Sala Civil de la CSJ, la STC 4459 de 2020 de Luis Darío Torres Vera, en la que mencionando la sustitución patronal indico: “Los trabajadores nunca fueron separados de su cargo y en tal medida las consecuencias sociales y prestacionales propias del contrato de trabajo se mantienen vigentes”

Revisadas una a una las sentencias mencionadas por la ejecutante en su recurso de alzada, se advierte lo siguiente:

- En la sentencia SL20195-2017 de JOSÉ MARÍA NANCLARES ZAMORA, la demanda fue presentada contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P., la EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A E.S.P., y a ETA SERVICIOS S.A. E.S.P.
- En la sentencia SL1805-2018 de LÍA PATRICIA MARÍN OROZCO, la demanda fue presentada contra EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A ESP y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A. ESP.
- En la sentencia SL5077-2018 de VÍCTOR HERNÁN VERGARA HENAO y otros, la demanda fue contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A. ESP.
- En la sentencia STC4459-2020 proferida dentro de la acción de tutela promovida por LUIS DARÍO TORRES VERA contra la Sala de Casación Laboral de Descongestión N° 2, se advierte que la demanda laboral fue promovida contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP.

Y en este proceso la demanda solo fue presentada contra EADE, no siendo dable extender el mandamiento ejecutivo a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN,

entidad que no fue llamada al proceso ordinario, menos vencida en este, por ende, la pretensión de la parte ejecutante en ese sentido no puede ser acogida.

Frente al recurso de la parte ejecutada, quien alega cumplimiento total de la obligación, se advierte que lo ordenado en el mandamiento de pago fue “el pago de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejados de percibir por el actor desde la fecha del despido hasta la fecha de liquidación de la empleadora (25 de junio de 2007) con las deducciones autorizadas en la sentencia del proceso ordinario”. Para ello debe tenerse en cuenta un salario de \$2.333.928 establecido en la sentencia del 1 de agosto de 2012 proferida por la H. CSJ, que sirve como título ejecutivo.

Ahora, la parte ejecutante recibió título judicial por \$89.182.870³, por lo que la ejecutada alega el pago total de la obligación con esa suma, trayendo la siguiente liquidación en los alegatos de conclusión:

LIQUIDACIÓN CONDENA JUDICIAL NEY ENRIQUE ARRIETA JIMÉNEZ			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES HASTA EL 25 DE JUNIO DE 2007 (APROBACIÓN CUENTA FINAL DE LA LIQUIDACIÓN)			
CONCEPTO	2005	2006	2007
DÍAS	272	365	176
SALARIO BÁSICO	20.871.357	28.007.531	13.505.001
PRIMA DE BONIFICACIÓN	1.734.329	2.333.929	1.134.728
PRIMA ADICIONAL	1.867.924	2.472.097	1.232.780
PRIMA DE NAVIDAD	2.182.568	2.532.472	1.142.950
CESANTÍAS	3.602.421	3.127.383	1.801.792
INTERESES A CESANTÍAS	432.291	375.286	104.257
TOTALES AÑO	30.696.889	38.848.699	18.921.508
INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL			25.388.065
TOTAL SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES MÁS INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN			113.840.182

Dice que “la liquidación final, definitiva presentada como cumplimiento de la sentencia es la que se debe tener en consideración por el juzgador, en ella el salario base de liquidación es la suma de \$2.333.928 como se ordenó, ponderado al número de días trabajados cada año (2005, 2006 y 2007)”

Sin embargo, no se conoce en detalle los conceptos y valores liquidados mes a mes, ni aparece el salario básico mensual. Dividiendo los montos totales de salario básico por

³ Ver página 448 del expediente virtual del proceso ordinario

el número de días y multiplicado por 30, para tratar de inferir el salario mensual aplicado en dicha liquidación, se obtiene lo siguiente:

AÑO	SALARIO TOTAL	DIAS LIQUIDADOS	SALARIO DARIO DÍA	SALARIO MENSUAL
2005	20.871.357	272	76.733	2.301.988
2006	28.007.531	365	76.733	2.301.989
2007	13.505.001	176	76.733	2.301.989

Siendo así, no se liquidó sobre el salario indicado por la Corte de \$2.333.928. Pero tampoco obra prueba que se hubiese liquidado con base en un salario de \$758.364 como lo indicó el a quo.

Dado lo anterior se evidencia un pago parcial por la suma de \$89.182.780, debiéndose continuar con la ejecución por el saldo insoluto de la liquidación de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales, partiendo de un salario de \$2.333.928 desde el 3 de abril de 2005 al 25 de junio de 2007.

Así las cosas, se CONFIRMARÁ íntegramente la decisión.

Sin costas en esta instancia

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 22 de octubre de 2020 que se revisa en virtud de los recursos de apelación, presentados por ambas partes, debiéndose continuar con la ejecución por el saldo insoluto de la liquidación de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales, partiendo de un salario de \$2.333.928 desde el 3 de abril de 2005 al 25 de junio de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Sin costas en esta instancia

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena incorporar este auto al expediente y regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 088 de mayo 24 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

264bece8062c28f5bb4342eb9f6f8010f984d6413361071a02fbee7a4c6f9da2

Documento generado en 21/05/2021 11:37:55 AM